



GETTY IMAGES

La precariedad laboral, un mal endémico que no protagoniza las marchas

El sueldo medio es de 1.477 euros brutos, 651 menos que la media y con mayor temporalidad

EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO
MADRID

Los agricultores españoles protestan estos días por varios motivos: se quejan de "excesiva burocracia", de lo "rígidas" que son las normas fitosanitarias en Europa, de las barreras comerciales, de que las ayudas no sean mayores, del aumento de los costes de producción... Otro elemento clave para entender los problemas del campo y que, sin embargo, no protagoniza tantas pancartas como los anteriores es la precariedad de los trabajadores. "Los que se están manifestando no son los trabajadores, son los grandes y los pequeños propietarios. No se está hablando de los problemas que tienen los empleados por cuenta ajena. Me llama la atención", opina el responsable del sector agrario en CC OO, Vicente Jiménez. La realidad laboral del campo es que los salarios están entre los más bajos de la economía española, la temporalidad se mantiene en registros altísimos, está entre los sectores que más recurre a las empresas de trabajo temporal (ETT), las jornadas están entre las más largas y notifica el peor dato de siniestralidad.

El sueldo medio bruto mensual en el sector agrario (engloba agricultura, ganadería, silvicultura y pesca)

era de 1.477 euros brutos mensuales en 2022 (últimos datos disponibles), según las cifras de la encuesta de población activa. Es el tercer peor registro en la clasificación por ramas por actividad, solo por encima de hostelería (1.390) y empleo doméstico (981). La nómina de los trabajadores del campo está lejos de la media (2.128) y mira con prismáticos a los sectores que mejor retribuyen, como información y comunicaciones (2.941), actividades financieras (3.394) y suministro de energía (3.498).

Según datos difundidos ayer por el Ministerio de Trabajo, el reciente incremento del salario mínimo a 1.134 euros brutos en 14 pagas beneficiará al 36% de los trabajadores del campo, muy por encima de los que ganan más por el alza de la menor retribución posible en servicios (16%), en industria (6%) o en construcción (4%). "Si no fuera por las subidas del salario mínimo la situación sería

El 37,6% de los asalariados en el campo es temporal, el doble que la media

insostenible", denuncia Jiménez, que critica a las patronales agrícolas por la "escasa negociación" en los convenios colectivos. Este sindicalista calcula que en torno a un 70% de los convenios provinciales agrícolas recogen categorías que se han visto superados por el nuevo salario mínimo. "Las quejas de los empresarios son loables y las compartimos. Piden que vayamos de la mano con ellos, pero debe haber un ten con ten. Se tiene que desbloquear la negociación colectiva". Cabe destacar que el incremento de los convenios agrícolas (3,98%) fue superior a la media (3,46%) el año pasado.

Los datos de temporalidad del campo también están entre los peores. En una actividad tan estacional la temporalidad es consustancial, pero esto no evita que las condiciones de trabajo resulten "menos atractivas; por eso cada vez cuesta más a los empresarios encontrar trabajadores", agrega Jiménez. El 37,6% de los asalariados en la agricultura tiene un contrato temporal, frente a la media del 16,5%, del 17,1% en servicios, del 16,2% en construcción o del 9,4% en industria. La reforma laboral ha huido este guarismo, que antes era del 54,2% en el sector agrícola, pero sigue en registros altísimos.

El sector alimentario carga contra la legislación medioambiental y su impacto en los precios

Agricultura, industria y distribución piden una tregua regulatoria

Temen el efecto del aumento de los costes laborales en sus cuentas

JAVIER G. ROPERO
MADRID

La cadena alimentaria señala a la regulación medioambiental como uno de los factores que siguen tensionando los precios de los alimentos, y que en parte sustentan las actuales protestas del campo en distintas partes de España.

El reglamento de envases y residuos de envases, que se debate en Bruselas, o el impuesto al plástico, aprobado por el Gobierno hace un año, están en el foco de la crítica, como coincidieron ayer representantes de las principales asociaciones y patronales de los distintos eslabones que componen la cadena: Cooperativas Agroalimentarias por parte del sector primario, FIAB por la industria y Asedas en el lado de la distribución alimentaria, en un encuentro organizado por el despacho de abogados Ramón y Cajal.

"El sector no está en contra de los objetivos medioambientales, pero lo que queremos es que alguna Administración nos escuche", explicó Tomás Rojas, director financiero y de relaciones institucionales de Cooperativas Agroalimentarias. "Llevamos cinco años sin que nos reciba el Ministerio para la Transición Ecológica. Están aprobando las leyes climáticas sin contar con el sector, y lo único que pedimos es que nos reciban".

Al respecto, Rojas reclamó tres puntos: intentar consensuar un calendario para conseguir los objetivos medioambientales; propiciar una "financiación adecuada" para llegar a ellos; y "estudiar las herramientas que podemos usar para lograrlos".



Los tractores se manifiestan por las calles de Logroño. EFE

"La legislación y la regulación también tienen un coste en las facturas", apuntó Mauricio García de Quevedo, director general de FIAB. Este recordó las turbulencias que ha afrontado la cadena agroalimentaria en los últimos años, incluso antes de la pandemia: desde los duros aranceles que impuso la Administración Trump a la importación de productos españoles, siguiendo con el Brexit, que "trajo unas trabas burocráticas tremendas".

Después llegó la propia pandemia, y tras ella el temporal Filomena de enero de 2021, "que tuvo un impacto brutal en el mundo rural y el transporte", según García de Quevedo. En 2022 le tocó el turno a la huelga de transportes y la guerra de Ucrania, y ahora la tensión en el mar Rojo. A ello se suma la "sequía más dura de la historia".

"La mayoría son factores que no se pueden contro-

Cooperativas Agroalimentarias reclama elaborar un calendario normativo

lar. Pero hay otros que sí, como el marco regulatorio. El impuesto al plástico, la nueva regulación de envases... Y más medidas listas para aprobarse, y que no ayuden", dijo García de Quevedo. Este también ha apuntado a los mayores costes laborales o fiscales: "Son cosas que no ayudan a una normalización de los precios", añadió.

En este sentido, Ignacio García Magarzo, director general de Asedas, el principal patronal de supermercados, también apuntó a una mayor flexibilización de la PAC, o la necesidad de cláusulas espejo con mercados de importación como Mercosur, germen de las movilizaciones en Francia. "Veníamos avisando desde hacía tiempo del impacto del alza de costes en los precios, pero no nos hacían mucho caso", dijo, subrayando también el impacto regulatorio en esa tensión.

"Hay que recalcar el comportamiento absolutamente responsable de la cadena en unas circunstancias absolutamente excepcionales", incidió García Magarzo, que también reclamó garantizar la libertad de circulación mientras se desarrollen las protestas.